

SEÑORES
JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL (REPARTO).
E. S. D.

REF: **MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA.**
DEMANDANTE: **GLORIA TORRES DE HERRERA Y OTROS**
DEMANDADO : **LA NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION.**

OSCAR MARINO TOBAR N, mayor de edad, domiciliado y residente en esta misma ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.16.356.422 portador de la tarjeta profesional número 101391 del Consejo Superior de la Judicatura, me permito presentar demanda de **REPACION DIRECTA** contra : **LA NACIÓN- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION, debidamente** representados por el Señor Procurador General de la Nación o quien lo represente o quien haga sus veces, a fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios que se le causo a **GLORIA TORRES DE HERRERA**, a la familia, por la sanción disciplinaria impuesta por la **PROCURADURÍA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA** , del 15 de junio de 2005, y confirmado en segunda instancia por la **PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA** Del 5 de septiembre de 2005, dentro del proceso disciplinario No. 074-4938 -05, de destitución e inhabilidad general de 10 años para el ejercicio de funciones públicas a **GLORIA TORRES DE HERRERA** en su calidad de honorable Concejal de la ciudad de Tuluá, sanción que fue objeto de **REVOCATORIA DIRECTA** por parte del despacho del **PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN**, quien en usos de sus atribuciones constitucionales y legales mediante **PROVIDENCIA** del 15 de mayo de 2012, declaro la pérdida de fuerza de los fallos disciplinarios sancionatorios ante mencionados, notificada el 25-05-2012, en razón a los Siguietes ,

PRETENSIONES

PRIMERA: Que se DECLARE administrativamente responsable a la **NACIÓN –PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, por la sanción disciplinaria impuesta a **GLORIA TORRES DE HERRERA**, mediante fallo de la **PROCURADURÍA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA** , del 15 de junio de 2005, y confirmado en segunda instancia por la **PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA** Del 5 de septiembre de 2005, dentro del proceso disciplinario No. 074-4938 -05, de destitución e inhabilidad general de 10 años para el ejercicio de funciones públicas a **GLORIA TORRES DE HERRERA** en su calidad de honorable Concejal de la ciudad de Tuluá, sanción disciplinaria impuesta que fue objeto de **REVOCATORIA DIRECTA** por parte del despacho del **PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN**, quien en usos de sus atribuciones constitucionales y legales mediante **PROVIDENCIA** del 15 de mayo de 2012, declaro la pérdida de fuerza de los fallos disciplina torios sancionatorios ante mencionados, notificada el 25-05-2012.

SEGUNDA : Que en consecuencia de lo anterior **LA NACIÓN- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION, debidamente** representados por el Señor Procurador General de la Nación o quien lo represente o quien haga sus veces reconozcas A título de de reparación o indemnización **DEL DAÑO OCASIONADO Y EL PADECIMIENTO MORAL DEL ACTOR Y SU FAMILIA, CON ACCION AL IMPONER** destitución e inhabilidad general por el termino de 10 años.

TERCERO : Que el pago será actualizada de conformidad con lo previsto en el Inciso 4 del artículo 187 del **NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011)**, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente.

CUARTA .: La parte demandada dará cumplimiento en los términos del artículo 192 del

NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011)

QUINTA : De igual forma a pagar como **PERJUICIOS MATERIALES** de acuerdo al **SALARIO Y DEMÁS EMOLUMENTOS DEJADOS DE PERCIBIR HASTA LA FECHA DE LA REVOCATORIA DE LA SANCIÓN**, sufridos con motivo de la **SANCIÓN IMPUESTA DE 20 DÍAS DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES** teniendo en cuenta que su esposa e hijos dependen del salario devengado por ella, y quienes se vieron privados de esa ayuda material (pago vivienda, alimentación, estudio, vestuario, salud y otros) Estos dineros aún no han sido reintegrados al actor a la fecha de la presentación de la demanda.

SEXTA : Dicho pago será actualizada en la forma prevista en el art. 178 C.C.A., reajustándola en su valor, (indexación) desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo de conformidad con la variación de precios al consumidor.-

SEPTIMA : Que **LA NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** representados por el Señor Procurador General de la Nación o quien lo represente o quien haga sus veces, deben dar cumplimiento a la Sentencia en los términos del Art. 176 y 177 del C.C.A. y pagarán todas las sumas a los demandante por intermedio de su apoderado conforme a los estipulado en el poder anexo.

OCTAVO : Si no se efectúa el pago en forma oportuna **LA NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** representados legalmente por el Señor Procurador General de la Nación o quien lo represente o quien haga sus veces, se liquidarán intereses moratorios conforme al Art. 177 del C.C.A.”

NOVENO : Que se de aplicación a los artículos 176, 177 y 192 Del C.C.A., para lo cual se expedirá Copia, con destino a las partes, haciendo precisión sobre cuál resulta idónea para hacer efectivos los derechos reconocidos. (Art. 115 del C. de P.C.)

DECIMO : Que se de cumplimiento al pago de la costas y agencias en derecho .

HECHOS Y OMISIONES

PRIMERO : Que la procuraduría regional del Valle del Cauca, mediante providencia del 15 de junio de 2005, en fallo de primera instancia , declaro responsable disciplinariamente a **GLORIA TORRES DE HERRERA**, en su calidad de concejala del Municipio de Tuluá, Valle, imponiéndole sanción de destitución e inhabilidad general de 10 años para el ejercicio de funciones públicas, argumentando fallas al tenor de lo previsto en el artículo 23 de la ley 734 de 2002. Al Incurriendo en la presunta contenida en el numeral 17 del artículo 48 de la ley 734 del 2002 .

SEGUNDO : Que la presunta fala se presentó, según el fallo, al incurrir en la prohibición referida al régimen de inhabilidad contenida en el artículo 49 de la ley 617 de 2000, modificado por el artículo 1 de la ley 821 del 2003, inciso 2, en la elección como personero **JOSE OLEGARIO GOMEZ DURAN**, que se encontraba incurso inhabilitado para ejercer el cargo, en la hipótesis del artículo 174 literal f de la ley 136 de 1994, a tener vínculos de parentesco en el 4 grado de consanguinidad con el concejal del Municipio **SAUL VELA GOMEZ**, quien presento el 9 de enero de 2004, ante el concejo de Tuluá declaración de impedimento para intervenir en la elección del personero, basado en el artículo 40 de la ley 734 de 2002.

TERCERO: Que mi poderdante **GLORIA TORRES DE HERRERA**, presento recurso de apelación contra dicho sanción, la cual fue resuelta mediante fallo de 5 de septiembre de 2005, confirmando dicha sanción de destitución e inhabilidad general por el termino de 10 años, en segunda instancia por la Procuraduría primera delegada para la vigilancia Administrativa.

CUARTO : Que por tal motivo ,el honorable Concejo de Tuluá, mediante resolución No. 046 de junio de 2005, procedió en cumplimiento al fallo sancionatorios de la procuraduría regional a declarar la destitución de concejala **GLORIA TORRES DE HERRERA**.

QUINTO : Que por ello, se solicitó la revocatoria directa al Procurador general de la Nación , para que declare la pérdida de fuerza de ejecutoria de los fallos disciplinarios proferidos por la **PROCURADURÍA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA** , del 15 de junio de 2005, y confirmado en segunda instancia por la **PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA** Del 5 de septiembre de 2005, dentro del proceso disciplinario No. 074-4938 -05, y se examine el cumplimiento de los aspectos sustanciales del debido proceso y del procedimiento que se sequio responda al principio de legalidad para garantizar la seguridad jurídica a los ciudadanos , en aras de evitar la arbitrariedad , ya que las faltas deben estar definidas previamente de manera concreta e inequívoca, para garantizar y fundamentar los derechos y garantías mínimas establecidas en el artículo 29 de C.P.

SEXTO : Que por tal motivo el Procurador general de la Nación Dr. **ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO**, profiere fallo revocatorio dicho fallos, por vulnerar manifiestamente el debido proceso y por ende el principio de legalidad dado que el personero elegido **JOSE OLEGARIO GOMEZ DURAN**, para la época de los hechos , investigados , no estaban incurso en inhabilidad que le atribuyen , y por ello dicha sanción a mi poderdante no está incurso en la inhabilidad establecida en el literal f del artículo 174 de la ley 136 de 1994 ya que desaparecen los fundamentos de derecho de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 66 del C.C..A., y por estar cumpliendo sus efectos.

SEPTIMO : Que con las actuaciones disciplinaria en contra de mi poderdante se le causó graves perjuicios Morales y Materiales a mis poderdante y su familia, y por ello, me han otorgado poder a fin d obtener el reconcomiendo y pago de todos los perjuicios causados con dicho actuaciones de la Procuraduría General de la acción.

Normas Violadas y Fundamento de la Violación

Cito como normas violadas los artículos 2, 6, 13, 25 y 90 de la Constitución Política.

Artículos 78, 86, 206 a 214 del Código Contencioso Administrativo.

Jurisprudencia del H. Consejo de Estado para sostener que la revocatoria del acto sancionatorio no puede generar un impedimento al administrado para acceder a la justicia, pues, la vía procesal para pedir el resarcimiento del perjuicio será la acción de reparación directa.

La desaparición del acto administrativo que causa un perjuicio no implica la desaparición de la posibilidad de exigir el resarcimiento al daño ocasionado, porque si bien ha desaparecido del mundo jurídico, el perjuicio se encuentra causado y podrá exigirse su reparación siempre que pueda demostrarse su ocurrencia y cuantía.

De manera conclusiva, se refiere a la procedencia de la acción de reparación directa cuando la indemnización solicitada gravita en torno a un acto administrativo revocado en sede administrativa, cuando la parte afectada a solicitado su desaparecimiento por la vía gubernativa o mediante la revocatoria directa como mecanismo de control de la actuación administrativa.

FUNDAMENTO DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

Nos fundamentamos en las siguientes disposiciones superiores y legales, Artículo 2 y 90 C.N. , ya que Corresponde al Estado por intermedio de sus autoridades la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, según expreso mandato constitucional, tal protección debe cumplirse con apego a las normas legales, dentro de las limitaciones que tal facultad les otorga, pero por sobre todo con un indeclinable respeto hacia los derechos humanos de los administrados. En tales condiciones, someten a algún ciudadano a tratos inhumanos violatorios de sus derechos fundamentales, le corresponde al Estado responder por las

actuaciones de sus agentes, cumplidas de tan censurable y reprochable manera. Aceptar tan ilegítimos procedimientos sólo llevaría a un agotamiento del mínimo de las Garantías que tiene el ciudadano frente a la administración y conduciría a que nuestro Estado de derecho quedara convertido en una simple ficción, cuyas normas y principios estructurales no superarían la condición de ser apenas teóricos enunciados o solo intrascendentes declaraciones.

Régimen de Responsabilidad

Debido ante los graves hechos presentados generaron un alto grado de vulnerabilidad a quienes se les debe garantizar el derecho a la PROTECCIÓN INTEGRAL,² derecho que hunde sus raíces en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y se desarrolla en la Declaración (1959), instrumentos que comprometen a los Estados firmantes a garantizar como objeto de políticas asistencialistas o punitivas (la llamada doctrina de la situación irregular⁵), para asumirlos como sujetos de derechos, a quienes es obligatorio proteger contra toda clase de agresiones, garantizarles su recuperación integral cuando hayan sido víctimas de la violación de sus derechos, y Los artículos 13, 44,45, 50 y 67 de la Constitución colombiana en referencia a la protección de todas las personas sin discriminan alguna y la enfatiza para quienes se encuentren en estado de debilidad manifiesta, consagran los derechos . se han visto perjudicados considerablemente, pues se han lesionado sus intereses familiares con la falla de la administración que compromete su responsabilidad. Por tanto, procede indemnización o reparación de los perjuicios materiales [daño directo -daño emergente y daño indirecto- lucro cesante] y morales (subjetivos o pretium doloris y objetivados), unos y otros actuales y futuros, que resultan de la irreparable pérdida de su compañero y padre, que los ha sumido en profundo dolor y aflicción.

Cita jurisprudencia del H. Consejo de Estado para advertir que es un error dirigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado por un acto administrativo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando este ha salido del mundo jurídico en virtud de la revocatoria directa de la entidad que lo profiere. Así, sería un absurdo buscar la nulidad de un acto que, jurídicamente, no existe; por ello, es procedente la acción de reparación directa siempre que se constate que el acto revocado ha generado un perjuicio al administrado a quien va dirigido, situación que además, garantiza al ciudadano el acceso a la justicia, entendida esta como una máxima del Estado Social no susceptible de sacrificio.

Respecto de la caducidad, apoyándose en criterios jurisprudenciales, manifiesta que en el caso de la reparación directa, los dos años deberán contarse desde que se encuentra en firme el acto que revoca, pues solo ahí es que el afectado puede darse cuenta del daño antijurídico que se le ha ocasionado, ya que, la entidad al aceptar el error cometido, además, esta aceptando que la sanción impuesta genera un perjuicio no justificado por el ordenamiento jurídico , es decir que, no era obligación del involucrado tener que soportarlo.

Al respecto el H. Consejo de Estado ha sido claro en manifestar que la acción de reparación directa es la adecuada cuando el acto administrativo que origina la lesión ha desaparecido del ordenamiento jurídico en virtud de la aplicación del instituto de la revocatoria directa, pues aunque se encuentre extinto el acto afectado de ilegalidad, de todas formas, la lesión persiste en el administrado quien tiene pleno derecho de acceder a la justicia para pedir la reparación del daño que se le ha ocasionado por parte de un agente del Estado, y, cuyo mecanismo de reclamación no será otro que la acción de reparación directa; los argumentos de la Corporación se esbozan así:

La ilegalidad del acto cuya nulidad se demanda en tanto que la órbita de acción de la de reparación directa, no reclama declaratoria de ilegalidad de acto administrativo alguno como

² Al respecto puede verse: García Méndez, Emilio. “Derecho a la infancia — Adolescencia en América Latina”. Ediciones Forum Pacis. Bogotá, 1994

⁵ Véase: García Méndez, Emilio. o.c.

condición para su prosperidad, no lo es menos que, en un caso como el presente, la circunstancia de que se hayan proferido actos administrativos y posteriormente se hayan revocado, ha de ser necesariamente considerada, en orden a la determinación de la vía procesal idónea y adecuada para el reconocimiento de los perjuicios que se demandan.

En este orden de ideas y como quiera que el acto administrativo de adjudicación desapareció de la vida jurídica por virtud de su revocatoria es imposible dentro de una lógica elemental sugerir al demandante que ha debido impugnar aquel acto mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otras razones, porque la propia administración reconociendo la falta de fundamento de la resolución de adjudicación procedió a revocarla y en esa medida imposible le resultaba al demandante haber optado por la acción de nulidad, que supondría cuanto lo primero la existencia del acto administrativo -vigencia- y lo segundo, la ilegalidad del mismo, presupuestos ambos indispensables para la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
}

Téngase presente que, al margen de la existencia del acto administrativo, bien pudieron haberse ocasionado perjuicios, cuyo resarcimiento no desaparece, por la circunstancia de la revocatoria del acto administrativo, que habiendo tenido una vida efímera fue revocado posteriormente y ello comporta precisamente lo contrario a lo sostenido por el Tribunal, esto es, la desaparición del acto administrativo como consecuencia de la prosperidad de la revocatoria directa, impide al afectado por aquel acto administrativo, solicitar el reconocimiento de eventuales perjuicios por la cuerda propia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por ausencia de acto.

Desde luego que, en un caso como el presente, la vía procesal con que cuenta el administrado para hacer valer su derecho sustancial es indudablemente la acción de reparación directa. Y no se diga que como el eventual perjuicio sufrido por el demandante encuentra su origen en un acto administrativo la única vía procesal para el reconocimiento de los perjuicios derivados del acto es la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues ello vulneraría el derecho del justiciable a utilizar la figura de la revocatoria directa en sede administrativa y ello en manera alguna puede sostenerse.

En conclusión: la acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo ilegal revocado en sede administrativa, cuando la parte afectada ha solicitado su desaparecimiento por la vía gubernativa o mediante la revocatoria directa como mecanismo de control de la actuación administrativa. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera. Sentencia del 24 de agosto de 1998, radicación no. 13685. Consejero Ponente Dr. DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ y EXPEDIENTE: 2008-001928-00 ACTOR: JAIME ARTURO PEÑA MUÑOZ Y OTROS. ACCIONADO: NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA.

En pronunciamiento más reciente, la Corporación sostuvo que: la acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo ilegal cuando tal ilegalidad ha sido declarada judicialmente, pues tal declaración deja a la vista una falla en el ejercicio de la función pública. Por ello, la demanda no podía ser rechazada.”

La causa del daño, tal como lo plantea la demandante, es el acto administrativo declarado ilegal, sacado de la vida jurídica por el juez contencioso administrativo, no susceptible de ser demandado otra vez. Sin duda, los perjuicios aducidos por el actor, podrán ser reparados en caso de que se encuentren acreditados debidamente. Obviamente, el haber desvirtuado la presunción de legalidad del acto del que el demandante dice se derivaron tales efectos, no obliga al reconocimiento de lo pedido por él, pues para ello debe haber certeza sobre todos los elementos de la responsabilidad. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera. Auto del 15 de mayo de 2003, expediente no. 23205. Consejero Ponente Dr. ALIER

HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ. Adicionalmente reiteró que: como en su oportunidad se expuso, la procedencia de la acción de reparación directa en los casos en que la propia administración ha revocado un acto

administrativo, con el que se causaron perjuicios, es una expresión del derecho a acceder a la justicia consagrado en el art. 229 de la Carta. En virtud del derecho constitucional mencionado, el juez, al examinar la procedencia de una acción ejercida por un particular, que busca solucionar una cuestión que al parecer compromete la responsabilidad del Estado, debe favorecer la opción que le permita a ese particular poner en movimiento el aparato judicial, procurando que la seguridad jurídica y el debido proceso no resulten sacrificados. En casos como el presente, se debe considerar la acción de reparación directa dado que el acto administrativo que presuntamente generó los perjuicios desapareció del ordenamiento jurídico, en el momento en que la administración reconoció su error. En estas circunstancias, es posible afirmar que el daño que se causa a los administrados únicamente se torna antijurídico en el momento en que la administración, reconociendo la ilegalidad del acto, decide retirarlo del ordenamiento jurídico. Con anterioridad a ello, el acto se encontraba protegido por la presunción de legalidad y, en consecuencia, los efectos que generaba se reputaban legales. En efecto, si se entiende, como lo ha expuesto la jurisprudencia, que únicamente es indemnizable el daño antijurídico y que dicha "calificación se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto el deber de soportarlo" es posible afirmar que el daño causado por un acto administrativo cobijado por la presunción de legalidad no es antijurídico sino en el momento en que la administración reconoce que el acto es ilegal, lo retira del ordenamiento jurídico y, por lo mismo, desaparece el deber de los administrados de soportarlo. En conclusión, es procedente la acción de reparación directa para obtener la indemnización de perjuicios causado por un acto administrativo que ha sido revocado por la administración. Lo anterior no obsta para que, como se dijo en la providencia de abril de 2001, el juez deba analizar si efectivamente el acto revocado era ilegal, si dicha ilegalidad se produjo como consecuencia de la actuación de la administración y si los perjuicios causados son indemnizables. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera. Sentencia del 7 de julio de 2005. Consejero Ponente Dr. ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ.

Hechas las anteriores precisiones, es obligado para la Sala desestimar la excepción de inepta demanda, ya que no puede negársele el acceso a la justicia a un ciudadano que siendo sancionado, confía en que dicha imposición se ha hecho conforme al ordenamiento jurídico y en respeto de las garantías constitucionales, bajo el supuesto que las personas depositan su confianza en la administración, la cual a su vez, presta los servicios inherentes a su naturaleza y de los cuales resultan beneficiarios los mismos depositantes, para que posteriormente se concluya que la sanción impuesta ha sido resultado de una actuación violatoria de derechos fundamentales como el debido proceso, teniendo que cargar al ciudadano con el malestar de la sanción y, adicionalmente, impidiéndole la oportunidad de manifestar su inconformidad, esta vez, por la vía jurisdiccional. afectado de ilegalidad, ya no hace parte del ordenamiento jurídico vigente.

Para el asunto sub-lite y en primer lugar, es claro que el daño lo produjo el acto administrativo que impuso la sanción disciplinaria, sin embargo, dicho acto amparado por la presunción de legalidad propia de todo acto de la administración hace suponer que ella fue impuesta conforme al ordenamiento jurídico, y por tanto, el daño resultaba soportable porque se tenía como legal. En segundo lugar, se tiene que el acto revocatorio de la sanción deja leer que dicha decisión fue violatoria de derechos y garantías fundamentales y por tal motivo desapareció del haber normativo fundamentado en la ilegalidad del mismo. De forma que, es en ése momento en que el administrado puede darse cuenta que el perjuicio sufrido ostenta la calidad de antijurídico pues se impuso una sanción en contravía de mandatos de naturaleza constitucional, por lo que ha de entenderse que es a partir el acto revocatorio que el administrado puede percatarse que la carga a él endilgada no debía ser soportada, motivo por el cual, nace el derecho de pedir la reparación por una lesión, con ocasión de una sanción, que a todas luces, es ilegal.

Conforme a lo anterior, el término de caducidad deberá contarse a partir de la ejecutoria del acto revocatorio, pues solo en ese momento es cuando el ciudadano descubre que el perjuicio a él ocasionado es antijurídico, y por tanto, indemnizable.

Para el caso concreto se tiene que el acto administrativo que revoca directamente la sanción disciplinaria impuesta al señor Peña Muñoz está fechado del 22 de junio de 2007 (fls. 8 a 15 C. Principal), a pesar que no aparezca dentro del acervo probatorio elemento que permita establecer la fecha de notificación, el término de caducidad se entenderá corrido desde la fecha en que fue proferida la providencia revocatoria. Por consiguiente, el periodo para intentar la acción de reparación directa está comprendido entre el 23 de junio de 2007 y el 23 de junio de 2009; ahora, a folio 61 del cuaderno principal se examina que la demanda fue presentada el 15 de mayo de 2008, cosa que sin vacilación permite concluir que el fenómeno de la caducidad no ha surtido sus efectos en el presente proceso.

2.4. EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA E INEXISTENCIA DE LA ACCIÓN.

Respecto de la improcedencia de la acción, en las consideraciones de la excepción de inepta demanda ya quedó decantado que en el evento de la revocatoria directa de un acto administrativo que genera lesiones al administrado, la acción procedente es la de reparación directa, esto, en defensa y garantía del acceso a la justicia y del debido proceso.

En lo que respecta a la inexistencia de la acción, por tratarse del fondo del asunto que se debate, será resuelto en las consideraciones que a continuación se exponen, ya que se determinará si hay lugar o no a la declaratoria de responsabilidad del Estado por los hechos propuestos en la demanda.

3. El régimen de responsabilidad.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño que se le causa.

Ahora bien, de conformidad con los hechos relatados en la demanda y en la contestación de la misma, resulta pertinente señalar que el régimen de responsabilidad que gobierna el caso es el de la falla del servicio, en virtud del cual corresponde a la parte actora demostrar los tres elementos fundamentales de la responsabilidad, a saber, el daño sufrido por el actor, la falla en la prestación del servicio, ya sea porque no se prestó o se prestó de manera tardía o deficiente y, finalmente, el nexo de causalidad entre el primero y el segundo, es decir, la comprobación de que el daño se causó como consecuencia inequívoca de la del servicio en la que incurrió la administración. Solo en caso de que este vínculo se encuentre debidamente acreditado dentro del proceso es posible atribuir responsabilidad en cabeza del ente demandado, porque de nada serviría demostrar la existencia de la falla si ésta no es la causa que dio origen de manera directa o indirecta a la producción del perjuicio.

Respecto del daño ocasionado por falla del servicio, el H. Consejo de Estado ha dicho que:

“(…)

La imputabilidad del daño a la Administración es más que la sola relación entre el hecho y el daño. La atribución de responsabilidad a la Administración requiere un título y de dicho título es precisamente la acción o la omisión por parte de la autoridad encargada de la prestación del servicio, es decir, que no basta con que exista un daño sufrido por una persona para que éste sea indemnizado: es menester, además, que dicho daño sea imputable, vale decir, atribuido jurídicamente al Estado. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera. Sentencia del 23 de noviembre de 2005. Consejero Ponente Dr. RAMIRO SAAVEDRA BECERRA.

3.1. El daño antijurídico.

El daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la Doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta la época 3 como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Según se desprende del texto de la demanda, el daño antijurídico que se intenta sea reparado por la accionada consistió en la imposición de la referida sanción disciplinaria en contra del señor JAIME ARTURO PEÑA MUÑOZ, proferida por la Procuraduría Regional del Cauca, mediante la cual se condenó a la suspensión en el cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por un período de veinte (20) días (fls. 16 a 29 C. Principal).

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 27 de junio de 1991, C. P. Dr. Julio César Uribe Acosta, expediente 6454.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 6 de junio de 2007, C. P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, expediente N° 16460. Ahora bien, de conformidad con el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, corresponde a la parte actora demostrar el daño antijurídico y, además, el nexo de causalidad en virtud del cual aquel es imputable en cabeza de la Entidad accionada, es decir que, deberá probar la efectiva lesión y la connotación de injusta de la misma.

Conforme a lo anterior, para efectos de demostrar el daño antijurídico, obra en el expediente copia auténtica del fallo sancionatorio proferido por la Procuraduría Regional del Cauca, en donde se llega a la conclusión que el agente encartado es responsable disciplinariamente por los hechos relacionados en el proceso (fls. 16 a 29 C. Principal), adicionalmente obra copia del fallo mediante el cual la Procuraduría General de la Nación revoca directamente la providencia proferida por el Procurador Regional del Cauca, sintetizando que la revocatoria se sustenta en la violación de garantías y derechos fundamentales de los disciplinados, específicamente el debido proceso, por la falta de notificación de las providencias, exigida por la Ley 734 de 2002 .

Adicionalmente se observa que la apoderada presentó solicitud para que se haga la respectiva corrección del fallo revocatorio, pues, en la parte resolutive se decide la revocatoria y absolución del encartado CARLOS BUSTAMANTE BERMÚDEZ, olvidando al agente JAIME ARTURO PEÑA MUÑOZ. Así las cosas, el Despacho del Procurador General de la Nación al analizar la solicitud correctiva, decide vincular al señor Peña Muñoz al contenido del fallo, por lo cual ordena la revocatoria del acto sancionatorio y absuelve al señor JAIME ARTURO PEÑA MUÑOZ de todo cargo (fls. 7 a 15 C. Principal).

3.2. La imputabilidad

La Imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y que por lo tanto en principio estaría en la obligación de responder, bajo cualquiera de los títulos de imputación de los regímenes de responsabilidad; esto es, del subjetivo (falla en el servicio) u objetivo (riesgo excepcional y daño especial).

La jurisprudencia sobre el régimen subjetivo de responsabilidad, esto es, por falla en el servicio, establece que corresponderá al Estado la reparación de toda lesión que cause a los administrados a través de sus agentes con ocasión de un daño antijurídico, es decir que, no deba ser soportado por el particular, y, que resulte probado y atribuible a la entidad generadora del perjuicio; este postulado encuentra su sustento en la cláusula general de responsabilidad estatal contenida en el artículo 90 de la Carta Política, disposición normativa ampliamente decantada no solo por la Jurisprudencia Contencioso Administrativa sino también por la Jurisprudencia Constitucional. Por lo anterior, no es necesario hacer el análisis sobre el régimen de responsabilidad aplicable a este caso, el cual, es el general para la atribución de responsabilidad extracontractual del Estado en ejercicio de la acción de reparación directa.

En el caso sub examine, se encuentra acreditado el daño ocasionado a un ciudadano quien tuvo que soportar una decisión de autoridad disciplinaria, la cual, siempre estuvo afectada de ilegalidad por violación de derechos y garantías constitucionales; motivo por el cual, también se encuentra probada la naturaleza antijurídica del mismo.

Consecuentemente y analizando la providencia mediante la cual la entidad revoca directamente la decisión de su delegada, puede observarse que ella misma acepta el error cometido en el curso del proceso disciplinario objeto de la lesión que actualmente se debate, en los siguientes términos:

En este orden de ideas, es claro para el despacho que la Procuradora Regional del Cauca, no solo pasó por alto los cuatro (4) oficios en los que el Jefe de la Oficina de Talento Humano del Departamento de Policía Cauca, manifestaba que el ST CARLOS MARIO BUSTAMANTE BERMÚDEZ, se encontraba laborando en el Comando Operativo de la Policía Nacional con sede en Bogotá, sino la información que de propia mano suministró el servidor, al momento de presentar su versión libre en la que señala su lugar de ubicación y el número telefónico de su residencia.

Tal inobservancia, llevó a la Procuradora Regional erradamente al declarar a los investigados, implicados ausentes, sin haber agotado previamente la notificación personal a través de funcionario comisionado, por encontrarse uno de ellos, el ST. BUSTAMANTE BERMÚDEZ, en sede diferente a la del competente.

En verdad, como lo afirma la solicitante de la revocatoria, no fueran mayores los esfuerzos que se desplegaron para realizar la notificación personal del auto de cargos, que como lo estipulan las normas en cita debe agotarse antes de proceder a realizar por cualquier otro medio.

El simple formalismo de requerir a los afectados para que se notificaran del auto de acusatorio-sic, no puede ser tenido por esta instancia funcional, como proceder convalidante de la actuación omisiva, cuando existe en el expediente un gran número de comunicaciones que reseñan el lugar de ubicación del disciplinado BUSTAMANTE BERMÚDEZ y menos, cuando es el mismo procesado el que identifica su lugar de ubicación y los datos donde se le puede citar.

El debido proceso en materia disciplinaria constituye una limitación a la potestad disciplinaria del Estado, en cuanto comprende las garantías sustanciales y procesales diseñadas para asegurar la legalidad y eficacia de la actividad procesal en la investigación y juzgamiento de las faltas

disciplinarias en aras de proteger los derechos de quienes pueden verse involucrados en procesos disciplinarios.

(...)

Así las cosas, y como al no haberse observado las formas propias que para los efectos se han impuesto en la parte adjetiva del Estatuto Disciplinario, para surtir la notificación personal del auto de cargos, entiende el despacho quebrantados manifiestamente los derechos constitucionales y fundamentales de Defensa y Debido Proceso que le asistían al servidor CARLOS MARIO BUSTAMANTE BERMÚDEZ.

Para garantizar el derecho de defensa, se le debe otorgar al investigado la oportunidad de tener acceso directo a la actuación procesal que contra él se adelanta cuando el Estado hace uso del poder punitivo, a través de los mecanismos procesales que la ley ha regulado específicamente de acuerdo con la naturaleza propia de cada actuación, según la clase de procesos penales, disciplinarios o correccionales.

La notificación personal tiene la virtualidad de asegurar plenamente el derecho de las personas a ser oídas dentro del proceso disciplinario con las debidas garantías constitucionales, y que también se erige en la forma de comunicación que en mejor forma asegura la realización de los principios de seguridad jurídica, de celeridad y de eficacia de la función disciplinaria, al permitir completa claridad respecto de los plazos o términos dentro de los cuales deben cumplirse las actuaciones procesales que les siguen. Por ello, el legislador la ha contemplado como la forma adecuada para surtir la notificación de las principales providencias dentro del proceso disciplinario, como es el caso del pliego de cargos.

Así las cosas, y como al no haberse observado las formas propias que para los efectos se han impuesto en la etapa adjetiva del Estatuto Disciplinario, para surtir la notificación del auto de cargos, entiende el despacho también quebrantados de manera manifiesta, los derechos constitucionales fundamentales de Defensa y Debido Proceso que le asistían al servidor JAIME PEÑA MUÑOZ, (...)."

Del análisis de las piezas probatorias anteriores, sin vacilación, se puede concluir que un ciudadano ha sido lesionado con una actuación administrativa, daño que ostenta la calidad de antijurídico, bajo el entendido que una persona no puede soportar la carga de una sanción disciplinaria que ha tenido en el transcurso de su imposición, actuaciones atentatorias de derecho y garantías fundamentales de los sujetos disciplinables.

Por otra parte, la misma Procuraduría General de la Nación, como sustento del acto revocatorio, acepta que se estuvo en presencia de una actuación violatoria de derechos por parte de la Delegada, pues, la falta de notificación, de todas formas, impide al procesado el ejercicio pleno de la defensa que le asiste en desarrollo de un proceso administrativo adelantado en su contra; y mas aun como una garantía que tiene toda persona para poder contrarrestar una eventual arbitrariedad de los administradores del ius puniendi del Estado.

Por consiguiente, para la Sala queda demostrado que el señor Jaime Arturo Peña Muñoz, tuvo que soportar los rigores de una sanción disciplinaria, que, impuesta con violación de derechos y garantías constitucionales, ostenta la calidad de antijurídica y, adicionalmente, encuentra la Sala que dicho daño es atribuible a la entidad demandada, toda vez que fue la Procuraduría Regional del Cauca la que impuso una sanción disciplinaria desatendiendo los rigores procesales, entendidos estos como la garantía que tienen todos los administrados en el curso de un proceso legal, ante una autoridad competente y garantista de la dignidad humana y demás garantías procesales establecidas en cabeza de los sujetos disciplinables.

Así las cosas, queda probado el nexo causal entre el daño ocasionado por desatención al proceso disciplinario, específicamente en materia de notificación de las actuaciones y providencias dentro del proceso disciplinario y, la omisión flagrante de la entidad, generadora del daño.

En conclusión, la revocatoria directa de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría Regional del Cauca a favor de mi poderdante, en virtud de la violación de garantías y derechos fundamentales, configura sin lugar a dudas, la existencia de un daño antijurídico, atribuible al Estado, cuya responsabilidad se concreta en la reparación de la lesión ocasionada al demandante.

COMPETENCIA y CUANTIA

Por el domicilio de las partes demandantes y la cuantía estimada que asciende a la suma de \$ 300.000. 000, Como valor económico a favor de mis poderdantes, la cual se determina de la siguiente manera,

PERJUICIOS MORALES

Liquidación de perjuicios

6.1. Perjuicios morales **Subjetivos,**

En el libelo de la demanda se busca la condena de la entidad demandada y, consecuentemente el pago por perjuicios morales la sumas de (100) salarios mínimos legales mensuales vigente a favor del actora **GLORIA TORRES DE HERRERA**, en mi calidad de Agraviada, **JAIME HERRERA HERRERA**, esposo, **MARTHA CECILIA, GLORIA INES, ALBA LILIANA, ISABEL CRISTINA HERRERA TORRES**, en calidad de hijos, como lo ha reiterado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado que la indemnización que se reconoce a quienes sufren un daño antijurídico, ante el dolor y sufrimiento que debieron padecer por los hechos denunciados, los perjuicios morales han sido incontables, y fueron días de angustia, por el futuro que todavía no han superado sus esposo e hijos.

Estos tiene una función básicamente satisfactoria y no preparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba; debe entenderse entonces, que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso, sirven para demostrar la existencia de la afectación, pero en ninguna forma constituyen una medida del dolor que de forma exacta pueda adoptarse, por ello la jurisprudencia ha establecido que con fundamento en dichas pruebas, corresponde al juez tasar de forma discrecional el valor de esta reparación **M RENATO SCOGNAMIGLIO**. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46. EXPEDIENTE: 2008-001928-00, 23

Perjuicios morales. **Objetivado,**

Es fundamental ya que se le esfuma así la grande y esperanza de ayudar en el futuro al sostenimiento del hogar, la cual se desprende del infortunio generado por la fallas en el servicio de los Entes demandados, desde la presentación de esta acción hasta realice fallo condenatorio, , lo cual estimo en **100 salarios**, para **GLORIA TORRES DE HERRERA**, mayor de edad e identificada con la cedula de ciudadanía como aparece al pie de correspondiente firma, y actuando en mi nombre propio y en mi calidad de Agraviada, **JAIME HERRERA HERRERA** mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando en mi nombre propio y en mi cálida de esposo, **MARTHA CECILIA, GLORIA INES, ALBA LILIANA, ISABEL CRISTINA HERRERA**. ante el dolor y sufrimiento que debieron padecer por los hechos denunciados, los perjuicios morales

han sido incontables, y fueron días de angustia , por el futuro que todavía no han superado sus esposo e hijos.

PERJUICIOS MATERIALES

Se solicita el reconocimiento de la respectiva indemnización a título de perjuicio material, por los dineros dejados de percibir por el actor con ocasión de la destitución y inhabilidad por 10 años , como sanción disciplinaria

DAÑO EMERGENTE

Que pague **los** perjuicios patrimoniales, por el valor que cuesta el pleito, incluyendo, claro esta lo que se deben pagar al abogado indispensable para hacer valer procesalmente sus derechos DEL **35%** dándole aplicación a la Tarifa de honorarios profesionales para esta clase de pleitos cuota litis.

Como consecuencia de la anterior, pagar como indemnización equivalente a la cancelación de gastos realizados en la defensa jurídica de la actora, seguridad social, y otros. lo cual estimo en la suma de \$ 30.000.000.

LUCRO CESANTE.

Para tales efectos, queda acreditado que **GLORIA TORRES**, se encontraba ejerciendo como Concejal del Municipio de Tulúa, según constancia del honorable concejo Municipal , De esta forma, la entidad demandada deberá pagar como indemnización por perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, el valor correspondiente a \$ 100.000.000, y en igual sentido para su señor esposo **JAIME HERRERA HERRERA**, suma liquidadas en el presente ítem deberán ser indexadas conforme a la fórmula planteada por el H. Consejo de Estado, así:

$$Ra = Rh * \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

En donde:

Ra: valor del salario- a la fecha del cumplimiento de la sentencia- actualizado a Establecer;

Rh: valor del salario –para la fecha de la suspensión- que se pretende actualizar;

Índice final: corresponde al Índice de Precios al Consumidor de la fecha en que Se realizará la actualización;

VIDA DE RELACION

Dado que mi poderdante se desempeñaba como concejala del Municipio y tenía un gran futuro político, aprecio social que le permitía gozar del aprecio de la comunidad y con su destitución y inhabilidad por 10 años, le afecto su vida pública, y su futuro promisorio, ya que fue objeto de toda clase de señalamiento que afectaron su buen nombre sin poder realizar sus aspiraciones personales y futuro, los causales estimo en \$ 300.000.000 millones de pesos para mi poderdante. **GLORIA TORRES DE HERRERA.**

PRUEBAS

Documentales:

1. Registro de nacimiento
2. Registro de matrimonio (1)
3. Fallo de revocatoria de la procuraduría.

4. Certificación del concejo de Tuluá.
5. Poder.
6. Certificación de fallida de audiencia de conciliación.
7. Cd.

DERECHO:

NOTIFICACIONES :

La **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION** en la Carrera 5ª nro. 15 - 60 (Bogotá) .

Los demandantes en calle 23 No. 22-32 de Tuluá..

El suscrito recibe notificaciones personales en mi oficina de abogado ubicado en la cra. 25 No. 25-36 oficina 102 edificio Octavio Montoya de Tuluá. Tel: 2253602-2254126, Cel. 3103733671, correo electrónico osmatoni2710@hotmail.com.

la agencia oficiosa del Estado.

Atentamente,

OSCAR MARINO TOBAR NIÑO.

c.c. 16356422

T.P. 101391 C.S.J.